

La globalización irresponsable

PABLO RUIZ JARABO*

Es indudable que en las sociedades desarrolladas se ha instalado un pesimismo que contrasta con el estado de opinión de la década pasada. Sus síntomas son evidentes: principios que parecían incuestionables, como la estabilidad en el empleo o el aumento lineal de los salarios y las prestaciones sociales, prácticamente se han derogado y su espacio ha sido ocupado por nuevos dogmas que encierran tristes contradicciones: sólo tendrá futuro el empleo inestable, y sólo virtualidad el Estado que reduzca las prestaciones a sus ciudadanos. Sin expectativas de mejora, no hay apenas espacio para el optimismo. Recientemente la revista norteamericana Newsweek se hacía eco de este

nuevo estado de ánimo al afirmar que, para que la recuperación económica que parece alumbrarse en Europa Occidental *mejore* la situación de los ciudadanos, *some uncertainty, anxiety and fear are essential*.

A la hora de atribuir causas a este cambio tan fundamental se señala continuamente a la globalización, término con el que se quiere definir el nuevo orden internacional; nuestro planeta se habría desregulado de tal manera que las fuerzas del internacionalismo económico no pueden someterse a control alguno: sólo es posible adaptarse o perder; y la adaptación significa el sometimiento al mínimo denominador común de las condiciones

* Diplomático.

laborales y la mínima presencia del Estado. Si en esto consiste el nuevo paradigma de las relaciones internacionales, llama la atención que, tal vez por primera vez en la historia contemporánea, se haya instalado un orden mundial ante el que los Estados sólo pueden plegarse. Estábamos acostumbrados a lo contrario: los sistemas de relaciones internacionales nacían de la voluntad e intereses de quienes lo formaban; los órdenes estatales moldeaban el orden interestatal, y no lo contrario. Incluso el último sistema, la Guerra Fría, cumplía estos postulados al nacer de los intereses contrapuestos de dos superpotencias y al morir ante los cambios acaecidos en una de ellas. Con la globalización sin embargo se asume que las nuevas condiciones, tanto al instalarse como al desatarse, se han convertido en ingobernables para los poderes tradicionales. Incluso sorprende que este cambio de perspectiva tan radical se haya asumido precisamente cuando, si algo demostró el fin inesperado de la Guerra Fría, era la debilidad de los métodos de análisis de las relaciones internacionales, tan sofisticados como incapaces de predecir la caída del comunismo. Lejos de generarse una crisis de confianza en nuestra capacidad de comprender, hemos sustituido un esquema por otro con una seguridad pasmosa.

Para llenar este salto en el vacío se ha rodeado a la globalización de fatalismo, un sentimiento tan próximo al pesimismo: ante las secuelas de la internacionalización económica sólo nos queda aceptar lo ineludible y adaptarnos a lo impuesto por las circunstancias. Pero una mirada al pasado más reciente deslegitima esta resignación determinista: la liberalización de los mercados se ha producido porque los Estados así lo han decidido al aceptar como prioridad en sus políticas comerciales el libre cambio. Si las mercancías circulan por el planeta es porque los poderes públicos han desmantelado, voluntaria y conscientemente, las barreras que no hace mucho las estancaban en las economías nacionales. Incluso en el mercado considerado

más veleidoso, el de capitales, *cada banco internacional es responsable en última instancia ante un único regulador nacional*, como afirma Kapstein. Más aún, esa renuncia al intervencionismo no es irreversible. Las medidas antidumping, la sencilla retirada de licencia al operador financiero que con su ordenador transfiere millones de dólares en una jornada, la paralización de mercancías en frontera como fórmula de retorsión o protección, son armas que continúan a disposición de los Estados y que, como atestigua cualquier periódico de información económica, distan de estar atrofiadas. Si no fuera así, no se explicaría que una de las instituciones internacionales que ha nacido con más fuerza en los últimos años haya sido la Organización Mundial de Comercio, encargada de velar por el libre cambio, siempre amenazado por los poderes públicos, e investida incluso con funciones arbitrales para derogar medidas proteccionistas, como ha ocurrido recientemente con las que regulaban la importación de plátanos en la Unión Europea.

Usando la memoria, la globalización pierde así su carácter novedoso y engarza con la teoría clásica de las relaciones internacionales: el orden vigente no es un personaje en busca de un autor, sino una opción expresa de los Estados, que mantienen así su carácter de protagonistas. Ello explica, por ejemplo, la contradicción entre las declaraciones de líderes de grandes potencias que enfatizan la imposibilidad de adoptar otra política y el hecho de que Estados con poco peso específico, como Cuba o Corea del norte, permanezcan aislados a las tendencias globalizadoras, mientras otros sin tanto condicionamiento político, como la India, liberalizan su economía con una parsimonia que es fruto exclusivo de su voluntad: la globalización no constituye una fuerza tan ajena como invencible, sino la aplicación de sendos tratados internacionales celebrados entre Estados. Nuestra actitud hacia ella debería cambiar por lo tanto su sentido: lejos de

resignarse, se trataría de recapitular los efectos —beneficiosos en su mayoría— de la opción voluntaria y responsable de la comunidad internacional por el libre cambio.

De la impotencia como actitud de respuesta ante la globalización se infiere otra peligrosa deducción: si se ha perdido cualquier margen de acción de los poderes públicos frente a circunstancias externas que se han convertido en decisivas, sólo queda adquirir conciencia de su existencia y adaptarse. Se invierten así los valores de la política hasta extremos que parecerían absurdos hace sólo diez años: desde la nueva atalaya global, la desventaja que para el trabajador suponía el menor salario o la mayor precariedad pasa a convertirse en una ventaja comparativa a la que es preciso aproximarse en aras de la competitividad. Asimismo, la política pierde todo voluntarismo. Ya no se trataría de *elegir* entre alternativas, sino de *reconocer* la única existente. Sin embargo, el libre cambio económico es mucho más complejo de lo que se deja entrever: la competitividad de las mercancías ya no se reduce a su coste en horas trabajadas, como sostenía la economía clásica. Y así, mientras las economías del sureste asiático, cuyo crecimiento se basaba en el menor coste de sus procesos productivos, comienzan a debilitarse, la reciente subida del dólar ha supuesto el aumento de las exportaciones de las economías europeas, cuyos salarios son los superiores del mundo. La calidad, la tecnología, la productividad, incluso la educación de la mano de obra, son factores tan influyentes como los salarios y cuestionan toda lectura simplista de la ventaja comparativa entre las naciones, a la vez que demuestran que aún son múltiples las alternativas de la cosa pública, luego también las políticas posibles.

Somos prisioneros de una peligrosa dualidad: reconocemos la complejidad del sistema actual —más bien de su ausencia— de relaciones internacionales; pero al mismo tiempo

sostenemos una lectura simplista de causas y efectos de su vertiente económica, y ello a pesar de que los hechos demuestran la relatividad de toda afirmación. Esta contradicción podría adquirir sentido si la analizamos desde el interior de nuestras sociedades. Contamos para ello con una vía expedita; se trata de esa característica tan novedosa de la globalización a que hacíamos referencia, consistente en que los órdenes nacionales habrían pasado a considerarse condicionados por vez primera por el internacional: extrañados por tamaña rareza, sostengamos que tal vez la globalización forme un discurso que serviría de válvula de escape de la tensión a que está sometida la convivencia interna en las sociedades avanzadas. En ellas, la política se ha basado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en el reparto del excedente de riqueza producido cada año. Las altas tasas de crecimiento económico aseguraban que todos los grupos sociales alcanzarían algún beneficio; y las expectativas de nuevo crecimiento convertían lo conseguido en irrenunciable, al tiempo que centraban el discurso en el reparto del excedente por venir. De producirse una recesión, no pondría en peligro el equilibrio social porque su carácter transitorio permitía al Estado encararla mediante prestaciones financiadas con deuda pública.

Sin embargo, desde hace años la economía no crece lo suficiente: no se produce el excedente necesario para contentar a todos los grupos. El pacto social se encuentra por ello paralizado porque se basaba en su reparto. Por eso han aparecido en nuestras sociedades grupos de población que resultan excluidos del circuito económico: no han podido adherirse al pacto porque no se disponía de suficiente riqueza para ellos. Para renovarlo, habría que cumplir una gravosa condición: debería centrarse no en la riqueza añadida, sino en la existente; requeriría el reparto de lo ya adquirido, con la inevitable renuncia a derechos y privilegios para compartirlos con los excluidos. Pero los incluidos no están dispuestos a tamaña

sacrificio, ni la clase política, prisionera de sus votos, a proponérselo. De ahí el impasse político actual.

No obstante, es necesario preservar el equilibrio: el pacto puede no renovarse, pero sin que ello suponga la ruptura de la convivencia. De ahí la necesidad de un discurso que, por una parte, explique las razones de esa paralización, deslegitimando así todo rupturismo y toda angustia ante la falta de respuestas; y por otra justifique tanto la continuidad de los excluidos en su triste situación como un paulatino deterioro de las condiciones de vida de los incluidos, imprescindible ante la contracción económica. Pues bien, la globalización cumple ambas funciones. Está presente en la explicación de las penurias actuales, así como en la justificación de nuevas medidas restrictivas. Además al referirse a una realidad externa, luego ajena a los ciudadanos, éstos no pueden calibrar la veracidad del discurso cotejándolo con su experiencia directa. Su lejanía lo convierte en maleable: liberado de la pesada carga de concordar con la realidad circundante, puede formularse a voluntad y servir de excusa de cualquier medida y situación. Sirve, en definitiva, para un roto como para un descosido. Su función más benéfica, sin embargo, es la exculpadora; si la política se ha basado en el pacto entre los grupos, nada obstaría para que en momentos difíciles éstos cruzasen acusaciones sobre la imposibilidad de repartirse nuevas prestaciones, con el consiguiente deterioro de la convivencia. Para evitarlo, la globalización, un fenómeno anónimo y sin rostro, se constituye en la principal responsable de lo que ocurre. Todos podemos culparla, diferenciando las propias responsabilidades. Y como no tiene voz, no puede defenderse. Como una caja de Pandora invertida, la hemos abierto para introducir en ella todas las causas de nuestros males. La globalización, analizada desde dentro, adquiere así un triste sentido: se ha convertido en el esquema que evita que la sociedad, ante el

empeoramiento de las condiciones económicas, se analice a sí misma en busca de causas próximas. Con ello se esquiva que éstas tengan un autor, y que se traspase la poca distancia existente entre causalidad y responsabilidad: la globalización se ha convertido en el puntal de la cómoda irresponsabilidad.

Esta tesis es cotejable con la realidad política de muchas de las naciones de la Unión Europea: desde hace años no conocen el progreso social generalizado a que estaban acostumbradas, y por primera vez en décadas han visto surgir nuevas categorías de ciudadanos excluidos de la economía. Al mismo tiempo, todo proyecto político se encuentra monopolizado por una imposición exterior: Maastricht. El proceso de unión monetaria y sus famosos criterios se han convertido en el único programa político posible y se han imbuido de una perentoriedad que imposibilita cualquier discusión sobre alternativas a los mismos; es decir, cualquier debate que, de decantarse hacia la situación interna, podría tornarse incómodo al desembocar en un cruce de acusaciones entre los grupos sociales. Asimismo, Maastricht — que, no se olvide, se justifica como la respuesta europea a los retos de la globalización— se constituye en motivo de los paulatinos recortes a las prestaciones sociales, convertidos así en tan ineludibles como incuestionables. Por lo que se refiere a la busca de responsables, los poderes públicos subrayan continuamente su escaso margen de acción y señalan a la unión monetaria como causa de toda política, de la que ellos son simples vicarios. Incluso que se sumarice todo el proceso en la evocación del nombre de la localidad donde se firmó el tratado de la Unión Europea contribuye a acentuar su anonimato. Encarnado en una ciudad, se omite que se trata de un acuerdo internacional refrendado expresamente por los Estados de la Unión Europea. Con ello, los poderes públicos evitan toda acusación al revestir sus dolorosas políticas de determinismo y alteridad, evitando a la vez la discusión sobre su contenido. Así, las

sociedades europeas sobreviven a una crisis prolongada salvaguardando la convivencia al evitar las inquietudes inherentes a la falta absoluta de mensajes y programas, a la vez que mantienen su cohesión al soslayar cualquier examen interno de responsabilidades.

No hace falta mucha perspicacia para percibir que la irresponsabilidad que genera el discurso globalizador entraña graves peligros. El primero y más obvio es el postergamiento de soluciones. Si reducimos nuestros problemas a una causa involuntaria y alejada que produce un cómodo efecto inmediato, la exculpación de todos, corremos el peligro de persistir en esta actitud, luego de aplazar debates y medidas que por desagradables no son menos necesarios. Es tentador rechazar la amargura de la medicina que antecede a la curación. Pero sólo desde una actitud más introspectiva, aunque sin duda más conflictiva inicialmente, seremos capaces de encarar abiertamente la reformulación de un pacto social que, bajo el título de Estado de bienestar, ha entrado en crisis por múltiples causas internas, muchas de ellas resultado de su mismo éxito: la maduración del capitalismo, el aumento de los gastos sociales por la longevidad y el progreso de la medicina, el estancamiento demográfico, la mera saciedad material de una población sometida a la publicidad excesiva, una sofisticación tecnológica que dificulta nuevos aumentos de la productividad y convierte el factor humano en superfluo... Comenzar a reescribirlo — cuestionando incluso lo tenido hasta ahora por irrenunciable— sí que es ineludible; y es nuestra obligación, como sólo puede ser nuestra iniciativa. No es cierto que ésta se encuentre maniatada por circunstancias externas tan alejadas como desconocidas. Pero este cambio de perspectiva exige una previa asunción de responsabilidades, precisamente el motivo que justifica todo el esquema vigente.

No es menos grave que el discurso globalizador se escape de nuestras manos. Inventada una

argumentación y lanzada a la palestra del debate público, podemos llegar a creérsela hasta el punto de dejarnos seducir por ella. Como el artista, podemos querer obligar a hablar a la estatua creada. Volviendo a Europa, se ha convertido en una opinión extendida que la situación económica española es mejor que la alemana por encontrarnos más próximos a los famosos criterios de Maastricht; que Alemania sufra menos paro que España tras haber absorbido a la antigua República Democrática; que su Estado de bienestar se encuentre a años luz del nuestro; que su renta per cápita y productividad casi nos doble; que su tejido industrial haya conocido un nuevo auge exportador ante la reciente subida del dólar, todo ello se tiñe de olvido y accesoriedad ante el reduccionismo de las cuentas públicas a que obliga la nueva verdad.

Pero el mayor peligro reside en la insistencia en vestir al discurso globalizador de una sencillez aplastante. Ya hemos visto que ello no es gratuito, pues es indispensable si se quiere convertir la argumentación en total y maleable, en convincente e impactante. Pero esa misma sencillez puede volverse contra quienes pretenden con ello salvaguardar la convivencia política interna. Bastaría con utilizar esa misma flexibilidad argumental para otros fines más belicosos. Si la apertura al exterior es causa de todas nuestras estrecheces, ¿por qué no expulsar a todos los extranjeros para resolver el problema del paro? Que en un Estado que se encuentra a la vanguardia del pensamiento europeo un partido que propugna tal medida se haya convertido en la tercera fuerza política debería hacernos reflexionar: si estamos dispuestos a crear un discurso imbatible para eludir nuestras responsabilidades, aunque sea irreal, podemos quedarnos sin defensa ante quien descubra en ello un campo abonado para proponer políticas que, sin necesidad tampoco de pasar por el tamiz de la realidad, manipulen esa misma sencillez para prometer soluciones rápidas y fáciles: en una palabra, para hacer demagogia.

El carácter postergador de que hablábamos más arriba —llevamos más de un lustro de defensa frente a la globalización sin que se produzcan mejoras sustantivas— alimenta este círculo vicioso.

La globalización, por lo tanto, podría suponer más efecto que causa. Más que un fenómeno inesperado y sorprendente, constituiría un esquema erecto en el exterior para conseguir fines internos. En definitiva, una nueva versión del *linkage* o eslabón, término que describe el efecto que los intereses nacionales producen en las relaciones internacionales moldeándolas. En esta ocasión el esquema no es dialéctico; no refleja tensiones de poder entre los Estados, sino que éstos coinciden en subrayar su propia debilidad ante la supuesta realidad internacional. Por eso el linkage no se ha formulado expresa ni abiertamente, precisamente porque se ha querido otorgar al nuevo orden el anonimato como rasgo esencial. Y lo lejano pasa así a determinar lo próximo, lo internacional pasa a abrumar la política doméstica. Ortega advertía de los riesgos del abuso de información internacional: las opiniones basadas en ella estaban condenadas a la incongruencia, porque la opinión pública no podía someterla al tamiz de la experiencia directa. Los gobiernos, señalaba el filósofo, no corrían ese riesgo al obedecer sus acciones a la razón. La política actual, tan teñida de internacionalismo y a la vez tan resignada a la parálisis ¿es razonable? A la reflexión crítica el deber de responder.